

INFORME SECRETARIAL.- Bogotá, D.C., 17 de abril de 2024, se informa al señor Juez, que el presente proceso ingresa al Despacho por petición verbal del señor juez. **Sírvase proveer.**

EVELYN GISSELLA BARRETO CHALA
Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DIECISIETE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ

Bogotá, D.C., Diecinueve de Abril de Dos Mil Veinticuatro

PROCESO: 2020-0205

Encontrándose las diligencias al Despacho, se advierte de oficio la causal de nulidad consagrada en el numeral 5 del artículo 133 del C.G. del Proceso.

ANTECEDENTES:

1. En efecto, se tiene que el demandado PEDRO IGNACIO RIVERA BUITRAGO, actuando por conducto de apoderado judicial, se notificó de manera PERSONAL bajo el amparo del art. 301 del C.G. del Proceso del auto admisorio de la demanda, quien presentó escrito de contestación de demanda, excepciones de mérito **y se opuso al juramento estimatorio.**
2. Mediante auto de fecha 16 de mayo de 2023, se corrió traslado de las excepciones de mérito presentadas por el extremo demandado, bajo el amparo del inciso 6 del art. 391 del C.G. del Proceso, sin hacer hecho pronunciamiento alguno de la oposición al juramento estimatorio.
- 3.- Vencido el anterior término, mediante auto de fecha 23 de noviembre de 2023, se convocó a la audiencia prevista en el art. 372 del C.G. del Proceso y allí mismo se decretaron las pruebas solicitadas por las partes en controversia.

CONSIDERACIONES:

Para el caso concreto que nos ocupa, tenemos que el numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso, establece que el proceso es nulo cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

Así, en primer lugar, es necesario recordar que las nulidades procesales estructuran un importante mecanismo instituido para restablecer el derecho al debido proceso de las partes, razón por la cual, el legislador les impuso un carácter preventivo para evitar trámites inocuos, y las mismas están gobernadas por principios básicos como el de la especificidad o taxatividad, trascendencia, protección y convalidación.

Debe precisarse, que las causales de nulidad consagradas en el artículo 133 de Ley Adjetiva Civil, fueron erigidas por el legislador como un mecanismo apto e idóneo que garantiza la prerrogativa constitucional fundamental del debido proceso y el derecho de defensa.

Acerca del aludido vicio procesal, la Corte Suprema de Justicia, ha enseñado que:

“...Trátase de hipótesis concernientes al debido proceso, a la carga probatoria, derecho de defensa y contradicción. Cada parte, puede ‘presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra’ (inc. 4º, artículo 29 Constitución Política) y tiene la carga probatoria (onus probandi) de los supuestos fácticos inherentes a las normas jurídicas invocadas (artículos 1757 Código Civil y 177 Código de Procedimiento Civil).

El legislador establece a las partes e intervinientes procesales precisas oportunidades para solicitar pruebas, y en ciertos eventos asigna al juzgador el deber de decretarlas, cuando ‘la utilidad y necesidad de la prueba, surgiera de la misma ley, por ésta exigirla imperativamente, o de las circunstancias propias del proceso respectivo, como cuando indubitablemente conduce al hallazgo de la verdad real y a determinar la decisión final’ (...).

(...)

La preterición de los términos para practicar pruebas decretadas legal y oportunamente, cuando no se haya saneado expresamente o por conducta concluyente, ‘constituye nulidad procesal, en los términos del numeral 6º del artículo 140 del C. de P.C.’ (cas. civ. sentencia de 28 de junio de 2005, [SC136-2005], exp. 7901), ‘que puede alegarse inmediatamente después de ocurrida en la actuación siguiente (art. 143, inc. 5º C.P.C.); pero en el evento en que tampoco haya existido esta oportunidad, por haberse proferido ya sentencia de segunda instancia, dicha irregularidad puede alegarse en casación’ (cas. civ. de 22 de mayo de 1998, exp. 5053, reiterada en la sentencia de 28 de junio de 2005) (CSJ SC, 20 oct. 2011, rad. 2003-00220-01).

La consagración de la comentada causal de anulación, ha dicho la Corte, deviene de “la lesión que infiere al principio de contradicción, pues sin tales oportunidades la parte afectada no cuenta con las etapas propicias para ejercer en debida forma la defensa de sus derechos. Para que la omisión del término de pruebas engendre nulidad, ha dicho la Corte, “debe implicar un evidente cercenamiento del derecho esencial que asiste a las partes para pedir pruebas y para que le sean decretadas y practicadas, con notorio desconocimiento del derecho de defensa” (G.J. CLXV pág. 70). Lo que se fulmina, dijo la Corte en otra ocasión, “con nulidad es el estado de indefensión que produce la imposibilidad de pedir o practicar las pruebas con que la parte pretende acreditar los hechos de la demanda, o los hechos que estructuran las defensas del demandado (CSJ SC, 11 sep. 2001, rad. 5761).

Significa lo expuesto, que, para efectos de la configuración de la causal de nulidad, se requiere que exista pretermisión de la oportunidad para solicitar, ordenar o practicar alguna prueba o la omisión de una prueba que por ley debía practicarse, eventos éstos únicos que hacen próspera la causal de invalidación.

Descendiendo al caso sub examine, se tiene que, conforme al trámite adelantado en el proceso de la referencia, tenemos que la litis fue integrada en debida forma, toda vez que el demandado, se notificó en debida forma y ejerció su derecho a la defensa.

A su vez tenemos que, si bien es cierto el Despacho corrió traslado de las excepciones propuestas por el extremo demandado, no es menos cierto que no indicó nada frente a la oposición al objeción al juramento estimatorio, para lo cual debía seguirse el trámite indicado en el inciso 2 del artículo 206 del C.G. del Proceso, concediendo el término de cinco días a la parte que hizo la formulación, para que aportara y solicitara las pruebas pertinentes, lo que en el presente caso no

ocurrió, cercenando con ello la oportunidad para que el demandante solicitara las respectivas pruebas.

Como si lo anterior no fuese suficiente, el Despacho continuó el trámite convocando a la audiencia prevista en el art. 372 del C.G. del Proceso y allí decretó las pruebas solicitadas por las partes, situación que no ha debido adelantarse por cuando se pretermitió el referido término que se enuncia en párrafo anterior.

Colofón de lo anterior, esta Sede Judicial, habrá de declarar la nulidad, del auto calendado 23 de noviembre de 2023, por medio del cual se convocó a la audiencia de que trata el art. 372 del CGP, para en su lugar, correr traslado a la parte actora de la oposición al juramento estimatorio, conforme lo disponen el inciso 2 del art. 206 del C.G. del Proceso.

En virtud y mérito de lo anteriormente expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad a partir del auto calendado 23 de noviembre de 2023, por medio del cual se convocó a la audiencia de que trata el art. 372 del CGP, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: EN SU LUGAR, de la oposición al juramento presentada por el demandado PEDRO IGNACIO RIVERA BUITRAGO, CÓRRASE traslado a la parte demandante por el término legal de cinco (05) días, de conformidad con lo normado en el inciso 2 art. 206 del C.G. del Proceso.

Comuníquese esta determinación a las partes y sus apoderados judiciales por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE,



HENRY ARMANDO MORENO ROMERO
Juez

JUZGADO 17 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ, D.C.

Bogotá, D. C., 22 de abril de 2024
Notificado por anotación en ESTADO
No. 016

EVELYN GISSELLA BARRETO CHALA
Secretaria

iqpc